



H. Cámara de Diputados
ENTRE RÍOS

PROYECTO DE LEY

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Capítulo I: Responsabilidad del Estado

ARTICULO 1°.- Esta ley rige la responsabilidad del Estado Provincial, Municipios, Comunas, Entes autárquicos, descentralizados y demás entes públicos estatales provinciales, municipales o comunales, en todas sus manifestaciones y niveles, por los daños que su acción u omisión les produzca a los bienes o derechos de las personas. La responsabilidad del Estado es objetiva y directa.

Las disposiciones del Código Civil se aplicarán supletoriamente en todo lo que no esté expresamente previsto en la presente.

ARTICULO 2°.- Se exime de responsabilidad al Estado en los siguientes casos:

- a) Por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial;
- b) Cuando el daño se produjo exclusivamente por el hecho del damnificado o de un tercero por quien el Estado no tuviere el deber de responder.

ARTICULO 3°.- Son requisitos de la responsabilidad del Estado por acción u omisión ilegítima:

- a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;

- b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal;
- c) Relación de causalidad adecuada entre la acción u omisión del órgano y el daño cuya reparación se persigue;
- d) Falta de servicio consistente en una acción u omisión irregular por parte del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber de actuación.

ARTICULO 4°.- Son requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad legítima:

- a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;
- b) Imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal;
- c) Relación de causalidad directa e inmediata entre la actividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue;
- d) Ausencia de deber jurídico de soportar el daño;
- e) Sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido.

ARTICULO 5°.- Responsabilidad del Estado por actividad lícita. El Estado responde objetivamente, por los daños derivados de sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del daño emergente; pero si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro.

ARTICULO 6°.- El plazo de prescripción para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres (3) años computados a partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños esté expedita.

ARTICULO 7°.- La acción u omisión de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que le están impuestas, los hace responsables de los daños que causen a terceros o al Estado.

La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años.

La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los tres (3) años a partir del efectivo pago realizado por el Estado de la indemnización condenada o convenida. La tramitación de las actuaciones administrativas que correspondieren producirán la suspensión del plazo de prescripción.

ARTICULO 8.- A los fines de la acción de repetición en los casos de condena judicial contra la Provincia, Municipios, Comunas, Entes autárquicos, descentralizados y demás entes públicos estatales provinciales, municipales o comunales, en todas sus manifestaciones y niveles por los hechos u omisiones imputables a sus funcionarios o empleados, cuando los mismos hayan integrado la litis, la sentencia respectiva determinará si medió falta personal de los mismos por la que deben responder frente a aquellos.

ARTICULO 9.- La responsabilidad contractual del Estado se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en forma supletoria.

ARTICULO 10.- El Estado Provincial no será responsable por los daños ocasionados por los Concesionarios de Servicios Públicos o Contratistas del Estado, salvo cuando fuesen consecuencia directa del ejercicio irregular del poder de ordenación, regulación o control sobre el servicio.

Capítulo II: Disposiciones procesales

ARTICULO 11.- Corresponde a los Jueces en lo Civil y Comercial, hasta que se creen los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, conocer y decidir en las demandas por responsabilidad del Estado Provincial, los Municipios, Comunas y entes autárquicos, y demás entes públicos estatales provinciales o municipales.

A las acciones por responsabilidad del Estado que se tramiten ante los Juzgados Civiles y Comerciales, se le aplicarán las reglas del Proceso Ordinario –Libro II Título II- del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos.

ARTICULO 12.- Corresponde a las Cámaras en lo Contencioso Administrativo conocer y decidir, en la materia que rige la Ley de Responsabilidad del Estado, en los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 con sede en la ciudad de Paraná, entenderá en los recursos que se interpongan ante los Juzgados en lo Civil y Comercial de los Departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Feliciano, Nogoyá, Victoria, Gualaguay y Federal. La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 con sede en la ciudad de Concepción del Uruguay, entenderá en los recursos que se interpongan ante los Juzgados en lo Civil y Comercial de los Departamentos Uruguay, Concordia, Tala, San Salvador, Federación, Villaguay, Colón, Gualaguaychú e Islas del Ibicuy.

A los recursos que se tramiten ante las Cámaras en lo Contencioso Administrativo, se le aplicarán las reglas de los Recursos Ordinarios –Libro I Título IV Capítulo IV- del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos.

ARTICULO 13.- Corresponde a las Cámaras en lo Contencioso Administrativo conocer y decidir la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley.

Al recurso de Inaplicabilidad de Ley que se tramiten ante las Cámaras en lo Contencioso Administrativo se le aplicarán las reglas de los Recursos Extraordinarios –Libro I Título IV Capítulo V- del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos.

ARTICULO 14.- Fuero de atracción. En el caso de integrar el Estado Provincial, los Municipios, Comunas y entes autárquicos, y demás entes públicos estatales provinciales o municipales, un litisconsorcio pasivo, serán competentes los jueces cuya competencia se encuentra establecida en la presente ley.

ARTICULO 15.- Previo a todo juicio, las partes deberán intentar la solución extrajudicial de la controversia, a cuyo fin se convocará obligatoriamente al procedimiento de mediación, que se regirá por las disposiciones del Libro I Título IV Capítulo VI, Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos. Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este trámite si acreditaran que antes del inicio de la causa existió mediación privada ante mediadores registrados ante el Superior Tribunal de Justicia.-

Capítulo III: Incorporaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial

ARTICULO 16.- Incorpórese al Artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Inciso 5.-) el que quedará redactado de la siguiente forma: *“Corresponde a los Jueces en lo Civil y Comercial hasta que se creen los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, conocer y decidir: ... 5.- En las demandas por responsabilidad del Estado*

Provincial, los Municipios, Comunas y entes autárquicos, y demás entes públicos estatales provinciales o municipales”.

ARTICULO 17.- Incorpórese al Artículo 53° Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial como anteúltimo párrafo, el que quedará redactado de la siguiente forma: *“Corresponde a las Cámaras en lo Contencioso Administrativo conocer y decidir, en la materia que rige la Ley de Responsabilidad del Estado, en los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 con sede en la ciudad de Paraná, entenderá en los recursos que se interpongan ante los Juzgados en lo Civil y Comercial de los Departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Feliciano, Nogoyá, Victoria, Gualeguay y Federal. La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 con sede en la ciudad de Concepción del Uruguay, entenderá en los recursos que se interpongan ante los Juzgados en lo Civil y Comercial de los Departamentos Uruguay, Concordia, Tala, San Salvador, Federación, Villaguay, Colón, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy”.*

ARTICULO 18.- Incorpórese al Artículo 53° Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial como último párrafo, el que quedará redactado de la siguiente forma: *“Corresponde a las Cámaras en lo Contencioso Administrativo conocer y decidir la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley.”*

ARTICULO 19.- De forma.



H. Cámara de Diputados
ENTRE RÍOS

FUNDAMENTOS:

El nuevo Código Civil y Comercial en la regulación de la responsabilidad estatal lo hace de manera excluyente: decide no regularla dentro de la responsabilidad civil.

A ello refiere de manera expresa dentro del Libro Tercero: “Derechos personales”, Título V: “Otras fuentes de obligaciones”, Capítulo 1: “Responsabilidad civil”, Sección 9ª: “Supuestos especiales de responsabilidad” en los artículos 1764 y 1765.

Es así que hasta la fecha, en nuestra provincia nos encontramos con el vacío legal, atento que la responsabilidad del Estado debiera regirse por las normas del derecho local, con el cual aún no contamos.

Hasta el momento la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado Nº 26944 es la primera y única ley a nivel nacional que regula esta materia, la cual tiene por objetivo general la regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado Nacional y específicamente de la responsabilidad extracontractual.

Dicho ello es que deviene esencial la regulación de la materia.

Las normas que reglamentan la responsabilidad del Estado es un asunto fundamental en un Estado de Derecho, y en palabras de María Angélica Gelli, “La responsabilidad del Estado es una consecuencia de la libertad y, ésta, es presupuesto esencial de los Estados constitucionales de derecho”, por lo que creemos primordial que la Provincia de Entre Ríos deba darse una ley de responsabilidad del Estado propia.

Dicha necesidad deviene del hecho que la Responsabilidad del Estado es la ausencia del estado absolutista y autoritario, habiendo significado su aparición el retroceso del concepto monárquico.

La posibilidad de demandar al Estado surge con la maduración de los conceptos nacidos con la Constitución Norteamericana y la Revolución Francesa, básicamente a partir de los principios de libertad, igualdad, fraternidad y el respeto al derecho de propiedad.

En nuestra Constitución Nacional la responsabilidad del Estado surge particularmente de los artículos 14, 16, 17 y 28, que con el reconocimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos, refuerzan el deber del Estado de respetar el derecho de los ciudadanos y en caso de dañarlos, proceder a la indemnización.

Pues bien, esa evolución de años en la cultura jurídica y política argentina, como asimismo el trabajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, deben ser fundamentalmente tenidos en cuenta al legislar en la materia, sin caer en inconstitucionalidades que luego la tornen inaplicable.

Es conforme a ello que he realizado este proyecto de Ley de Responsabilidad del Estado para la Provincia de Entre Ríos, por lo que solicito de la Honorable Legislatura de la Provincia de Entre Ríos proceda a sancionar el presente con fuerza de Ley.